



COMENTARIOS DE ESPAÑA

PROPUESTA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE EXENCIÓN POR CATEGORÍAS (RGEC)

Primer Comité Consultivo, 7 de diciembre de 2021

Las autoridades españolas agradecen a la Comisión Europea la propuesta de modificación del Reglamento nº651/2014, de 17 de junio ("Reglamento general de exención por categorías" o RGEC), presentada el 6 de octubre de 2021, así como el esfuerzo realizado para alinear esta norma con las nuevas estrategias de la Unión Europea en materia medioambiental, digital e industrial.

Asimismo, se ruega a la Comisión que, una vez adoptada la modificación del Reglamento, elabore y publique directrices/guías/FAQs dirigidas a los Estados miembros para facilitar la aplicación e interpretación de este.

I - COMENTARIOS SOBRE LAS AYUDAS PARA ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE

1. COMENTARIOS GENERALES

- ¿Cambiaría el Reglamento (UE) 2015/2282 de la Comisión de 27 de noviembre de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 794/2004 en lo que respecta a los formularios de notificación y las fichas de información para adaptarse a las nuevas Directrices?
- El GBER no debería crear un marco para apoyar el consumo de combustibles fósiles. Esta cuestión transversal se aplica a temas como el hidrógeno no renovable o el gas natural en las centrales de cogeneración.
- Sugerimos evitar la inclusión de hidrógeno bajo en carbono en todo el GBER. El hidrógeno renovable se definirá de acuerdo con la descripción proporcionada en la Estrategia de Hidrógeno de la UE.
- El "hidrógeno renovable" es el hidrógeno producido mediante la electrólisis del agua (en un electrolizador, alimentado por electricidad) y con la electricidad procedente de fuentes renovables. Las emisiones de gases de efecto invernadero durante todo el ciclo de vida de la producción de hidrógeno renovable también pueden producirse mediante el reformado de biogás (en lugar de gas natural) o la conversión bioquímica de biomasa, si se cumplen los requisitos de sostenibilidad.



- No está claro si las infraestructuras diseñadas para pruebas y experimentación incluirán las primeras unidades de producción de un producto específico (por ejemplo, pilas de combustible H₂). Esta infraestructura podría reducir significativamente los costos de producción de las primeras unidades productivas logrando economías de escala y promoviendo una mayor competencia.
- ¿Qué pasa con los grupos de energía? ¿Tienen la misma consideración que los centros de innovación digital?
- Las cadenas de valor del hidrógeno, incluida la producción, el transporte, la distribución y el consumo, deben estar exentas de impuestos ambientales y de otro tipo.
- ¿Estamos de acuerdo con la definición de H₂ bajo en carbono? Hidrógeno de origen fósil con captura y almacenamiento de carbono o hidrógeno basado en electricidad, donde ese hidrógeno logra un ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de al menos [73,4%] [lo que da como resultado emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida inferiores a 3 tCO₂eq / tH₂] en relación con un comparador de combustibles fósiles de [94g CO₂e / MJ (2.256 tCO₂eq / tH₂)]. El contenido de carbono del hidrógeno de base eléctrica será determinado por la unidad de generación marginal en la zona de licitación donde se encuentra el electrolizador en los períodos de liquidación de desequilibrio cuando el electrolizador consume electricidad de la red.
- Almacenamiento de energía: En esta versión de la propuesta del RGEC, el almacenamiento de energía no se considera como una infraestructura, ni está incluido en la definición de infraestructura energética ni incluido en el artículo 48. Sin embargo, no está claro bajo qué artículo del RGEC puede incluirse el almacenamiento, híbrido con energía renovable como independiente.

España considera que el almacenamiento de energía debería estar cubierto por el RGEC dado que:

- La Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, y el Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019 sobre el mercado interior de la electricidad indican la importancia de fomentar el almacenamiento de energía como factor clave para una mayor penetración de las energías renovables, junto con la plena participación del almacenamiento de energía en los mercados de la electricidad.
- Los planes nacionales de energía y clima españoles 2021-2030, aprobados por la Comisión Europea, incluyen la introducción de 6 GW de energía adicional de almacenamiento de energía para 2030



- España es una “isla energética”, con una ratio de interconexión eléctrica inferior al 5%, por debajo del objetivo del 10% en 2020 y del 15% en 2030. La flexibilidad en forma de almacenamiento de energía es clave para garantizar la seguridad de suministro en un escenario de aumentar la penetración de las energías renovables.

- Se requiere una fase de transición entre el actual RGEN y el nuevo.
- ¿Los agregadores, la gestión de la demanda, la digitalización, los nuevos modelos de negocio energéticos, etc. podrían verse reflejados en el RGEN?
- Proponemos limitar la carga administrativa en la medida de lo posible. Por ejemplo, el artículo 36.a) indica:

“8. La necesidad de ayuda para incentivar el despliegue de infraestructura de recarga o repostaje de la misma categoría se establecerá mediante una consulta pública abierta previa o un estudio de mercado independiente. En particular, se establecerá que no es probable que dicha infraestructura se despliegue en condiciones comerciales en un plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la medida de ayuda.

La obligación de realizar una consulta pública abierta ex ante o un estudio de mercado independiente establecida en el párrafo primero no se aplicará a las ayudas para la construcción, instalación, mejora o ampliación de la infraestructura de recarga o repostaje que no sea accesible al público.”

Dado el estado actual de desarrollo de la infraestructura para vehículos eléctricos (VE's), parece desproporcionado solicitar dicha consulta o estudio, será una carga administrativa que retrasará considerablemente la concesión de ayudas. No obstante, siendo ese el caso, proponemos establecer un umbral mínimo del 15% de BEV del número total de vehículos (M1 y N1) registrados en el estado miembro en cuestión como requisito previo para requerir la consulta o estudio antes mencionado.

- Ayudas al sector de la pesca y la acuicultura - Proponemos incluir “subvenciones para la protección del medio ambiente” dentro del alcance del artículo 1.3.a
- ¿Cómo se justificará el cumplimiento de los objetivos energéticos y climáticos para la cogeneración de alta eficiencia?
- ¿Por qué la seguridad del suministro de energía, que se incluye dentro de las pautas propuestas de ayudas estatales para el clima, el medio ambiente y la energía, y que incluye el almacenamiento, no se incluye en el RGEN?

2. DEFINICIONES (ART.2)

(101)- Protección del medio ambiente - Estamos de acuerdo con la nueva definición propuesta para “protección del medio ambiente”, aunque proponemos reforzarla incluyendo al final de la frase **“y otros contaminantes atmosféricos;”**:



*101) "protección del medio ambiente": toda medida destinada a subsanar o prevenir los daños al entorno físico o a los recursos naturales causados por actividades humanas, incluidas la adaptación al cambio climático y su mitigación, a reducir el riesgo de tales daños o a impulsar un uso más eficiente y sostenible de los recursos naturales, incluidas las medidas de ahorro energético y el uso de fuentes de energía renovables y otras técnicas de reducción de los gases de efecto invernadero **y otros contaminantes atmosféricos;***»

(109) - Deberían explicarse las implicaciones de no considerar la energía renovable la que se descarga del almacenamiento de energía. Entendemos que por razones estadísticas es necesario evitar la doble contabilidad, pero consideremos necesario eliminar, a efectos prácticos, la última parte de la frase de la definición 109:

(109) 'energía procedente de fuentes renovables' o 'energía renovable': la energía procedente de fuentes de energía renovables no fósiles, tal como se define en el artículo 2, punto (1), de la Directiva 2018/2001 / UE, así como la proporción en términos del poder calorífico de la energía producida a partir de fuentes de energía renovables en plantas híbridas que también utilizan fuentes de energía convencionales e incluye la electricidad renovable utilizada para llenar los sistemas de almacenamiento conectados detrás del medidor (instalados conjuntamente o como complemento de la instalación renovable), ~~pero excluye la electricidad producida como resultado de los sistemas de almacenamiento;~~"

3. AYUDAS PARA ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE

3.1. Ayudas para protección medioambiental (Art.36)

- Art. 36.1. Debe evitarse la inclusión de hidrógeno con bajo contenido de carbono
- Art. 36.2 ter. Aclarar el art. 36.2. ter, ya que la fabricación de electrolizadores podría aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero.
- Art. 36.5. Aclarar cuál sería la tasa de descuento para analizar la inversión contractual.
- Art. 36.8. En cuanto a la necesidad de una consulta ex ante o un estudio de mercado como requisito previo para el desarrollo de un esquema de apoyo destinado a las estaciones de carga públicas para vehículos eléctricos, nuestros comentarios se han establecido en la sección de observaciones generales.
- Art 36 a.2. Debe evitarse la inclusión de hidrógeno con bajo contenido de carbono.
- Art 36 a.4. Se dice: "La ayuda en virtud de este artículo se otorgará en un proceso de licitación competitiva".

Consideramos que el proceso de competencia competitiva no debe ser obligatorio para todos los casos, ya que, si bien puede ser recomendable para recargas de acceso público en carreteras, no lo sería para una recarga privada o en el sector servicios, donde las ayudas deberían darse a través de simples competencia, solo para cumplir con los requisitos de la convocatoria. Esto aceleraría y haría un despliegue más dinámico.

- Art. 36.a.9. indica:



“No obstante lo dispuesto en el apartado 8, se presumirá la necesidad de ayuda para recargar o repostar infraestructura para vehículos de carretera cuando los vehículos propulsados exclusivamente por electricidad (para recargar infraestructuras) o los vehículos propulsados al menos parcialmente por hidrógeno (para repostar infraestructuras) representen respectivamente menos del 2% del número total de vehículos de la misma categoría matriculados en el Estado miembro de que se trate. A los efectos del presente párrafo, los turismos y los vehículos comerciales ligeros se considerarán parte de la misma categoría de vehículos”.

Nuestra propuesta es elevar el umbral del 2% hasta un 15% como mínimo. Este no es un mercado adecuado con un 2% de EV del número total de vehículos, no existe un caso comercial para la infraestructura de acceso público bajo esa condición.

- Art 36 b.4

Se dice: *“La ayuda en virtud de este artículo se otorgará en un proceso de licitación competitivo según se define en el artículo 2”.*

En el caso de incentivos para la adquisición de vehículos limpios y cero emisiones, no debe exigirse un proceso de competencia competitiva para otorgar la ayuda, ya que los incentivos deben darse a aquellas adquisiciones que cumplan los requisitos especificados en las convocatorias.

- Los requisitos de eficiencia energética para el apoyo adicional deben estar vinculados a lo que ya se está haciendo a nivel de MRR (ahorro de energía primaria del 30%, en lugar del 40%):

“6a. La intensidad de la ayuda podrá aumentarse en 15 puntos porcentuales para las ayudas concedidas para mejorar la eficiencia energética de los edificios a que se refiere el apartado 3 bis, cuando las mejoras de la eficiencia energética den lugar a una reducción de la demanda de energía primaria de al menos un 40% en el caso de renovación de edificios existentes.”

- ¿Puede incluirse en el art. 36 el almacenamiento de energía FTM (Antes del Contador), tanto híbrido con energías renovables, como autónomo? Considerando que, según el fondo de innovación, reduce los vertidos de energías renovables y por tanto reduce las emisiones, especialmente para una “isla energética” como España.

3.2. **Ayudas para la promoción de energía procedente de fuentes renovables (art. 41 y 43)**

En los artículos 41 y 43, los combustibles subvencionados deben fabricarse a partir de las materias primas enumeradas en la parte A del anexo IX de la Directiva para quedar exentos del requisito de notificación. Entendemos que esta disposición está destinada a biocombustibles, biogás para transporte y biolíquidos. Por lo tanto, los combustibles de biomasa no deben incluirse dentro del alcance de dicha disposición. Por tanto, el artículo 41.2 y el artículo 43.3 deben modificarse de la siguiente manera:

41.2. Las ayudas a la inversión para la producción de biocarburantes, biogás para el transporte y biolíquidos, ~~biogás y combustibles de biomasa~~ estarán exentas del requisito de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado solo en la medida en que los



combustibles subvencionados sean conformes con la sostenibilidad y Los criterios de ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero de la Directiva (UE) 2018/2001 y sus actos de ejecución o delegados y se elaboran a partir de las materias primas enumeradas en la parte A del anexo IX de dicha Directiva.

43.3. Las ayudas de funcionamiento para la producción de biocarburantes, biogás para el transporte y biolíquidos, ~~biogás y combustibles de biomasa~~ estarán exentas del requisito de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado solo en la medida en que los combustibles subvencionados sean conformes con la sostenibilidad y Los criterios de ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero de la Directiva (UE) 2018/2001 y sus actos de ejecución o delegados y se elaboran a partir de las materias primas enumeradas en la parte A del anexo IX de dicha Directiva.

- Art. 41. Sírvanse explicar por qué en los proyectos de hidrógeno renovable que consisten en un electrolizador y una o más unidades de generación renovable detrás de un solo punto de conexión a la red, la capacidad del electrolizador no excederá la capacidad combinada de las unidades de generación renovable.
- Explique por qué las infraestructuras renovables dedicadas para la producción de hidrógeno renovable no pueden financiarse con arreglo al art. 41.
- ¿Qué se considera BTM (Detrás del Contador), en el contexto del almacenamiento de energía? Por favor, sería muy útil tener una definición de almacenamiento de energía BTM. Explique por qué solo se incluye el almacenamiento de energía BTM y no el FTM.
- Por favor aclare qué significa que el almacenamiento de energía deberá tener, como máximo, la misma capacidad que la generación:
“(1a) ... La inversión en almacenamiento tendrá como máximo la misma capacidad que la inversión renovable conectada”.
- Explique por qué la intensidad de la ayuda para el almacenamiento de energía es inferior a la de la generación renovable. Considere aumentar la intensidad de la ayuda para el almacenamiento de energía, considerando que el almacenamiento de energía tiene un déficit de financiación mayor que la generación renovable.
- El nuevo párrafo 4 bis debería evitar cualquier referencia al gas natural:
“4a. Las ayudas a la inversión para la cogeneración de alta eficiencia estarán exentas del requisito de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado solo si no se refieren a instalaciones de cogeneración alimentadas con combustibles fósiles, a excepción del gas natural, que cumplen los objetivos climáticos para 2030 y 2050 está asegurado.”;
- La respuesta a la demanda debe incluirse explícitamente. La redacción del apartado relacionado con el sector de la construcción ya lo permite, pero debería extenderse a otros sectores (por ejemplo, terciario, industria).
- Art. 41.10. ii. Incluye como requisito que *“el número esperado de licitadores será suficiente para asegurar una competencia efectiva”.*



No está claro cómo se puede probar esto ex ante.

- ¿Existe algún requisito relacionado con el autoconsumo en las entidades no sujetas al RGEN (por ejemplo, entidades públicas)? El artículo 43 define renovables de baja capacidad como las de menos de 400 kW.

Según nuestra experiencia, este umbral debería aumentarse hasta 1 MW.

- Las comunidades de energías renovables se mencionan en el art. 43 diciendo:
“2a. Las ayudas a las comunidades de energías renovables estarán exentas del requisito de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado solo para proyectos con una capacidad instalada inferior a 1 MW emprendidos por entidades que se ajusten a la definición de comunidad de energías renovables”

Proponemos:

- a) Elevar el umbral (1 MW en el anteproyecto actual) y al mencionarlo incluir la frase “menor o igual a”. En cuanto a este umbral, cabe mencionar que se aplica tanto a aplicaciones eléctricas como térmicas.
- b) Incluir en el alcance del art. 43. 2a las comunidades ciudadanas de energía.
- c) Incluir en el artículo 41 exactamente el mismo tratamiento a las comunidades de energías renovables y comunidades de energía ciudadana que el contenido en el artículo 43.

3.3. **Ayudas en forma de reducciones de impuestos con arreglo a la Directiva 2003/96/CE**

Este artículo, en el apartado 2, señala que: *“Los beneficiarios de la reducción fiscal se seleccionarán sobre la base de criterios transparentes y objetivos, y deberán pagar al menos el nivel mínimo impositivo de la Unión fijado en la Directiva 2003/96/CE.”* Entendemos que esto es incompatible con el artículo 16 del proyecto de ETD en el que se prevé una **exención total** para determinados productos en cierta forma beneficiosos para el medio ambiente (electricidad de fuentes renovables, por ejemplo).

3.4. **Ayudas a la inversión para la remediación de daños ambientales, la rehabilitación de hábitats y ecosistemas naturales, la protección o restauración de la biodiversidad o la implementación de soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación y mitigación del cambio climático (Art. 45)**

- Queremos transmitir nuestro apoyo a la ampliación del alcance en este capítulo, ya que consideramos necesario abrir la posibilidad de recibir ayudas para estas actividades. Por ejemplo, con arreglo a las actuales Directrices regionales, las inversiones para producir biocombustibles (de origen alimentario o forestal), así como las plantas de reciclado para la producción de biocombustibles, quedaron fuera de la ayuda regional, según lo confirmado por la Comisión.
- Del mismo modo, las 'Directrices sobre la protección del medio ambiente y la energía para 2014-2020' no incluyen la posibilidad de otorgar este tipo de inversiones, sino en una fase posterior (plantas de generación de energía con el uso



de biomasa). De esta forma, estas inversiones no pudieron ser apoyadas por ninguno de los dos regímenes de ayuda.

- En términos de mitigación, la extensión del alcance también parece muy positiva. Sin embargo, es difícil decidir cómo encajar esos proyectos que tienen como objetivo reemplazar los gases fluorados en el aire acondicionado, refrigeración y otros equipos por gases con menor o nulo potencial de calentamiento global.
- Para finalizar, consideramos este borrador como una oportunidad para armonizar el alcance sectorial de las ayudas regionales (exclusión de lignito, inclusión de fibras sintéticas y construcción naval, exclusión de ayudas a infraestructuras de banda ancha e investigación en el apartado de ayudas regionales, aclaración sobre la definición de sectores de transporte y energía). Esperamos que esto permita que las fases intermedias de la producción de energías renovables, fuente de actividad en el medio rural, no se conviertan en un cuello de botella para que la biomasa se pueda utilizar como pellets certificados, en lugar de leña que es perjudicial para la calidad del aire.

3.5. Ayudas a la inversión para la eficiencia en el uso de los recursos y para apoyar la transición hacia una economía circular (artículo 47)

En general, consideramos la propuesta de art. 47 incluye la mayoría de los tipos de inversión y mejora la jerarquía de residuos. Sin embargo, en nuestra opinión aún es necesario aclarar alguna redacción en el texto:

- Algunas actividades deben describirse de manera más explícita en el texto. Por ejemplo, entendemos que las actividades relacionadas con la eficiencia en el uso de agua / aguas residuales, su reutilización y preparación para su reutilización se incluyen en los apartados 2.c) y 2. d). Pero esta es una interpretación de la definición de "otros productos, materiales o sustancias".
- En el punto 5, entendemos que cuando dice "colección" debe decir "colección separada", ¿podría confirmarnos este punto?
- En el punto 6 se afirma que las inversiones deben ir más allá de las prácticas comerciales establecidas o económicamente rentables que se aplican generalmente en toda la Unión y a todas las tecnologías. Desde un punto de vista tecnológico, consideramos que las inversiones deberían conducir a un mayor grado de reciclabilidad o una mayor calidad del material reciclado en comparación con la práctica habitual. ¿Podría aclarar si se puede interpretar como ecodiseño, necesario para mejorar todo el ciclo de vida del producto para apoyar la transición a una economía circular?



II - COMENTARIOS RELATIVOS A LAS AYUDAS A LA I+D+I

1. COMENTARIOS GENERALES

En particular, en el ámbito de la I+D, se acoge con especial satisfacción la introducción de la metodología simplificada de cálculo de los costes indirectos.

Por otra parte, se subraya nuevamente la absoluta necesidad de que la Comisión realice la modificación del RGEC de forma coordinada y paralela con la revisión del resto de directrices de ayudas, entre ellas, el Marco de ayudas de Estado a la I+D+i.

Esto es, los conceptos, definiciones, condiciones y procedimientos comunes en el RGEC y en el Marco deben estar perfectamente alineados. Ello redundará en una mayor consistencia y eficiencia del marco regulatorio aplicable a las ayudas de Estado a la I+D+i.

2. AYUDAS A LA INNOVACIÓN

Las observaciones realizadas por España sobre la regulación de estas ayudas en el borrador de Marco de ayudas a la I+D+i resaltaban la necesidad de alinear las definiciones de innovación con el Manual de Oslo y, en consecuencia, se proponía la supresión de la distinción entre innovación organizativa y de procesos.

El texto de RGEC propuesto mantiene esta distinción entre “innovación en procesos” e “innovación en materia de organización” (apartados 96 y 97 del artículo 2).

No se abarca la innovación de producto, pero las dos definiciones anteriores, tomadas conjuntamente, podrían estar cercanas a lo que el manual de Oslo define como “innovación en proceso de negocio”, si bien menos concreto.

Por ello, se sugiere a la Comisión revisar estas definiciones para realizar un mejor ajuste al Manual de Oslo utilizando una única definición.

3. DEFINICIÓN DE DESARROLLO EXPERIMENTAL

La definición de desarrollo experimental del RGEC y del Marco de I+D+i indica que éste podrá incluir el desarrollo de prototipos o proyectos piloto que puedan utilizarse comercialmente “cuando sean necesariamente el producto comercial final y su fabricación resulte demasiado onerosa para su uso exclusivo con fines de demostración y validación” (apartado 86, artículo 2).

El término “demasiado oneroso” es un concepto jurídico indeterminado que convendría aclarar, dado que no es evidente determinar cuándo un prototipo puede tener un uso comercial.

Por ello, se insta nuevamente a la Comisión a clarificar (en el Marco/RGEC o en directrices/FAQs) el concepto “demasiado oneroso” y ofrecer pautas para calcular la onerosidad del prototipo y los elementos o criterios objetivos que deben utilizarse a tales efectos (por ejemplo, ventas o volumen de negocios de la empresa, parámetros de mercado u otros).



Por otra parte, parece que los entornos de prueba regulatorios (“sandbox”) podrían entenderse incluidos en la definición de desarrollo experimental del RGEC, al referirse a la “prueba y validación de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados en entornos representativos de las condiciones operativas de la vida real”. Sería conveniente que la Comisión lo aclarara, a la vista de la creciente importancia de esta figura, bien en el propio texto o en directrices/FAQs.

4. COSTES SIMPLIFICADOS

El texto propuesto simplifica las condiciones para la ayuda a los proyectos de I+D proponiendo utilizar un enfoque de costes simplificados para calcular los costes indirectos de los proyectos de I+D, en forma de cantidad a tanto alzado de hasta el [15 %], aplicada a los costes directos totales subvencionables del proyecto de I+D.

Se agradece a la Comisión esta importante modificación.

No obstante, las autoridades españolas proponen incrementar este porcentaje al 20%-25%, por resultar más acorde con la realidad de las empresas que acometen proyectos de I+D, a la luz de la experiencia práctica de las autoridades españolas en la financiación de proyectos de I+D, y más coherente con lo previsto en el programa Horizonte Europa.

Por otra parte, el artículo 7.1 del texto estipula que los importes de los costes subvencionables podrán calcularse con arreglo a las opciones de costes simplificados establecidas en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, o el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, según proceda, siempre que la operación sea financiada, al menos parcialmente, mediante un fondo de la Unión que permita el uso de esas opciones de costes simplificados.

Debe reseñarse que las opciones de costes simplificados previstas para los costes indirectos en los Reglamentos de los Fondos Estructurales son diferentes a las contempladas en la propuesta de RGEC en lo que respecta a los proyectos de I+D.

Esto implica que, en función del origen de fondos (UE o nacional), las autoridades nacionales deberán aplicar distintos métodos para calcular los costes indirectos en los proyectos de I+D, lo que supone una mayor carga administrativa y complejidad burocrática, en detrimento del objetivo de simplificación perseguido por el Reglamento.

Por ello, se insta a la Comisión a que revise la relación entre los artículos 7.1 y 25.3.e), permitiendo utilizar en los proyectos de I+D, además de un porcentaje fijo sobre costes totales, el sistema previsto en las normas aplicables a los fondos UE consistente en calcular los costes indirectos con una tasa fija de hasta el 15 % de los costes directos de personal subvencionables¹.

¹ Artículo 54 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.



5. DEFINICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE ENSAYO Y EXPERIMENTACIÓN (INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS)

Se propone una nueva definición de infraestructura de ensayo y experimentación (equivalente según indica el texto a infraestructura tecnológica), en la que se prevé que ofrece apoyo para la investigación industrial y el desarrollo experimental y que sus usuarios serán principalmente empresas (artículo 26 bis).

No parece contemplarse que estas infraestructuras lleven a cabo actividades económicas y no económicas y, en consecuencia, no se prevé en tal caso la separación de cuentas ni la previsión de un mecanismo de claw-back. Sería conveniente que el texto aclarara expresamente que estos requisitos no son exigibles en estas infraestructuras, para mayor seguridad jurídica.

Asimismo, la intensidad máxima prevista (25%) debería incrementarse, suponiendo que estas infraestructuras realizan no solo desarrollo experimental sino también investigación industrial.

Por otra parte, el texto propuesto del RGEC no regula el concepto de “capacidad” ni el mecanismo de control ex post de las actividades económicas accesorias de las infraestructuras de investigación, conceptos relevantes e indeterminados que sí son contemplados en el Marco de I+D+i y cuya clarificación ha sido reiteradamente solicitada a la Comisión por los Estados miembros. Estos conceptos deberían ser contemplados en el RGEC y constituyen un claro ejemplo de las razones por las que se solicita la revisión del RGEC de manera coordinada con el Marco de I+D+I.

6. EMPRESAS INNOVADORAS EN CRISIS

En las observaciones al Marco realizadas por España, se solicitó a la Comisión que estudiase la posibilidad de excluir a las PYMES innovadoras (según la definición del artículo 2, apartado 80 del RGEC) del concepto de empresas en crisis en lo que respecta a las ayudas a la I+D+i, por las siguientes razones:

- Dado que el modelo de negocio de las empresas intensivas en I+D se caracteriza porque pueden acumular pérdidas durante varios años hasta que sus proyectos se lanzan al mercado.
- Dado que la propia Comisión, en las directrices de ayudas a la financiación de riesgo, hace referencia a estas empresas, en términos en los que se reconoce la dificultad de generar retornos en un corto plazo desde su creación.
- Dado que en los resultados del fitness check se reconoce que el criterio de desaparición del capital social puede cumplirse sin que ello implique necesariamente incumplimiento de sus obligaciones de pago.
- Dado que empresas en esta situación están llevando a cabo investigaciones sobre vacunas y tratamientos contra la COVID 19 sin por ello tener derecho a ayudas.

El texto propuesto no plantea ningún cambio en este sentido en lo que respecta de las ayudas a la I+D+I, si bien sí tiene en cuenta las circunstancias especiales de las empresas innovadoras a efectos de las ayudas a la financiación de riesgo.



No parece coherente que las empresas innovadoras tengan un tratamiento más favorable para recibir ayudas de capital riesgo y, sin embargo, esas mismas especificidades no se tengan en cuenta para que puedan optar a las ayudas de I+D+i.

En particular, debe recordarse que el fallo de mercado que justifica la concesión de ambas ayudas para las empresas innovadoras es el mismo: información imperfecta y asimétrica, que dificulta su financiación por el mercado.

Si bien la financiación de riesgo puede resultar menos distorsionadora de la competencia, lo cierto es que su importe es habitualmente más elevado que el de las ayudas a I+D. Por otra parte, se puede limitar el tiempo durante el cual las PYMES innovadoras no sean consideradas en crisis a efectos de la obtención de ayudas de I+D (por ejemplo, durante los 7 años desde su primera venta comercial, como en el caso de las ayudas de riesgo).

Por lo expuesto, se propone a la Comisión la siguiente redacción del artículo 2, punto 18, letras a) y b):

«a) si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada (distinta de una pyme con menos de tres años de antigüedad o, a efectos de los criterios para poder optar a las ayudas a la financiación de riesgo una pyme que cumpla los requisitos del artículo 21, apartado 3, letra b), y que cumpla las condiciones para recibir inversiones de financiación de riesgo tras las comprobaciones de diligencia debida por parte del intermediario financiero seleccionado o, a efectos de los criterios para poder optar a las ayudas a la I+D+i una pyme innovadora, conforme a la definición del artículo 2, apartado 80, que lleve operando en cualquier mercado menos de siete años desde el momento de su primera venta comercial), cuando haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas acumuladas; (...)

b) si se trata de una sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad (distinta de una pyme con menos de tres años de antigüedad o, a efectos de los criterios para poder optar a las ayudas a la financiación de riesgo, una pyme que cumpla los requisitos del artículo 21, apartado 3, letra b), y que cumpla y que cumpla las condiciones para recibir inversiones de financiación de riesgo tras las comprobaciones de diligencia debida por parte del intermediario financiero seleccionado o, a efectos de los criterios para poder optar a las ayudas a la I+D+i una pyme innovadora, conforme a la definición del artículo 2, apartado 80, que lleve operando en cualquier mercado menos de siete años desde el momento de su primera venta comercial), cuando haya desaparecido por las pérdidas acumuladas más de la mitad de sus fondos propios que figuran en su contabilidad;(....)

7. SUBVENCIONABILIDAD DE ALGUNOS ACTIVOS CUANDO ESTÁN APOYADOS POR AYUDAS A LA I+D+i

La Comisión propone excluir de la ayuda regional los costes de edificios, terrenos y equipos mientras éstos reciban apoyo con arreglo a las normas del RGEC sobre ayudas a proyectos de I+D+i. Concretamente, se excluyen del ámbito de aplicación de las ayudas regionales “*las ayudas que cubran los costes de inversión en edificios, terrenos y equipos en la medida en que formen parte de un proyecto apoyado en virtud del artículo 25 y mientras sea este el caso*” (artículo 13).



Asimismo, en el caso de las ayudas a la inversión en favor de las PYMEs, dejan de ser subvencionables los costes de adquisición de activos materiales e inmateriales cuando están apoyados por ayudas a proyectos de I+D+i: *“Serán subvencionables uno o varios de los costes siguientes: a) los costes de inversión en activos materiales e inmateriales, siempre que no estén sujetos al artículo 25”* (artículo 17.2)

En primer lugar, no se entiende por qué esta limitación se refiere solo a las ayudas a proyectos de I+D+i, dado que otras ayudas también financian activos. Hasta ahora, tanto las ayudas regionales como las ayudas a la inversión para PYMES eran compatibles con las ayudas a la I+D sí siempre que se respetaran los criterios de acumulación. No se entiende la razón por la que la limitación no se establece en base a las reglas de acumulación de ayudas.

Por otra parte, la inclusión de este límite en el artículo 13 relativo al ámbito de aplicación de las ayudas regionales no parece la más adecuada, ya que parece cuestionar la compatibilidad de estas ayudas con las de I+D. De mantenerse esta previsión, encajaría mejor en el artículo 14.4 relativo a los costes subvencionables de las ayudas regionales.

Además, la terminología empleada en el texto resulta confusa: el artículo 13 se refiere a “costes de equipos...”; el artículo 17.2 a “costes de inversión en activos materiales e inmateriales” y el artículo 25.3 a “costes de instrumental y material”. Sería conveniente unificar la denominación de estos conceptos si se refieren a los mismos costes.

Por todo ello, se propone suprimir los cambios introducidos en los artículos 13 y 17 o alternativamente mejorar su redacción y sistemática.

8. LA DIGITALIZACIÓN

La propuesta de la Comisión menciona expresamente los productos, procesos y servicios digitales en las definiciones de investigación industrial y desarrollo experimental, innovación en procesos y en organización.

No obstante, las ayudas a la I+D o a la innovación no resultan siempre suficientes para apoyar la digitalización de las PYMES, y es preciso aplicar adicionalmente otras categorías de ayuda (por ejemplo, inversión para PYMES), lo que dificulta la financiación de estos proyectos.

Por ello, en aras de la simplificación y con el objeto de poder financiar los gastos inherentes a la digitalización con la debida seguridad jurídica, en particular, la adquisición de activos, las autoridades españolas proponen:

- La modificación de los costes elegibles en las ayudas a la innovación en materia de procesos y organización para incluir la adquisición de equipos y activos necesarios para la digitalización, o
- Alternativamente, si la Comisión lo considerase más adecuado, la creación de una subcategoría dentro de las ayudas a la I+D+i de “ayudas para la digitalización de las PYME” que contemplara gastos de adquisición de activos, así como gastos de personal.



Nótese que el propio Reglamento ya contempla una subcategoría específica de ayudas a la digitalización de las PYMEs, dentro de las ayudas a la I+D+i derivadas de productos financieros apoyados por el Fondo InvestEU (apartado 9 vi) del artículo 56 sexies), con un límite por proyecto de 30 millones de euros.

9. OTRAS OBSERVACIONES

9.1 Definiciones aplicables solamente en determinadas categorías de ayudas

El artículo 2 del RGEC contempla múltiples definiciones, de las cuales muchas solo resultan aplicables a determinadas categorías de ayudas, cuando se trata más bien de definiciones generales, esto es, aplicables a varias tipologías de ayudas.

A modo de ejemplo:

- La definición de “digitalización” se encuentra restringida al ámbito del medio ambiente (artículo 2, apartado 103 quater). Ello resulta paradójico en cuanto a que el propio Reglamento permite financiar la digitalización en otras categorías de ayudas, por ejemplo, en el marco del instrumento Invest EU o en las ayudas a la cultura.
- La definición de «pequeña empresa de mediana capitalización» (apartado 103 sexies) nuevamente se limita a las ayudas al medio ambiente y, sin embargo, es un término aplicable en Invest EU y en capital riesgo y podría ser de aplicación en materia de I+D.
- La nueva definición de “tecnología nueva e innovadora” (apartado 114), como “una tecnología nueva y recientemente validada, en comparación con el estado actual de la técnica en el sector, que lleve implícito un riesgo de fracaso tecnológico o industrial y que no sea una optimización o desarrollo de una tecnología existente”. Resulta una definición más bien genérica y, sin embargo, queda limitada su aplicación nuevamente al ámbito medioambiental.

En definitiva, estos conceptos deberían formar parte de las definiciones comunes aplicables a todas las categorías de ayudas (artículo 2, apartados 1 a 26).

Por otra parte, existen otras definiciones relevantes en materia de ayudas y que sin embargo no aparecen en el RGEC. Es el caso del término “empresa de mediana capitalización”, definido en las directrices de ayudas de financiación del riesgo, pero no incorporado al Reglamento.

Se ruega, por tanto, a la Comisión que revise las definiciones del RGEC y su aplicabilidad a las distintas ayudas, así como su alineamiento con las definiciones incluidas en las distintas directrices de ayudas, en aras de la coherencia normativa y de la seguridad jurídica.



III - AYUDAS REGIONALES: EL EFECTO INCENTIVADOR

El texto modifica el artículo 6 RGEC relativo al efecto incentivador para exigir, en el caso de ayudas regionales ad hoc a grandes empresas, que la verificación de rentabilidad se lleve a cabo en relación con cualquier lugar del Espacio Económico Europeo (EEE).

No parece tener sentido esta modificación ni está claro su objetivo, ya que en el supuesto de que existan otros lugares en el EEE en los que la inversión sería rentable, no podría concederse la ayuda. Con ello, de forma indirecta se incentiva a las grandes empresas a no invertir en zonas asistidas poco rentables mientras puedan obtener rentabilidad en otros países o zonas, aunque, por lo que se ve, éstas ni siquiera tienen que ser asistidas. El principio de cohesión, base de las ayudas regionales, parece quedar en este caso ignorado.

Por otro lado, esta verificación puede resultar en un elevado incremento de trabajo tanto para el solicitante como para las autoridades concedentes que deberán contrastar las declaraciones de éste para evaluar su veracidad, aumentando con ello la carga administrativa.

IV - AYUDAS DESTINADAS A NUEVOS PROYECTOS EMPRESARIALES

Se valora muy favorablemente la posibilidad introducida en el artículo 22 RGEC de que las ayudas a nuevos proyectos empresariales adopten la forma de transferencia de derechos de propiedad intelectual de un organismo de investigación, si bien se sugiere recoger también como forma de ayuda la licencia de tales derechos.

Por otra parte, se propone incluir las ventajas fiscales como otra forma de ayuda a estas empresas. En efecto, los incentivos fiscales no están recogidos actualmente en ninguno de los instrumentos de apoyo al emprendimiento previstos en el artículo 22 del RGEC, que solo contempla subvenciones, garantías y préstamos. En este sentido, consideramos muy importante que se incluya una reducción de los tipos impositivos a estas empresas “start up”, para facilitar la puesta en marcha de sus nuevos proyectos empresariales. Este tipo de ayuda no tendría apenas efectos distorsionadores en el mercado y, por el contrario, sus efectos serían enormemente positivos.

V - ACUMULACIÓN DE AYUDAS

No se entiende bien cómo se pueda alcanzar el 100% de los costes del proyecto respetando las intensidades del RGEC, salvo que se considere financiación pública tanto la proveniente del Fondo Europeo de Defensa como del Estado miembro y esta última sea la que esté limitada por la intensidad del RGEC. Este es uno de esos puntos en los que convendría que la Comisión aclarase mejor el texto en el sentido antes enunciado y en el caso de que concurrieran otras ayudas de gestión centralizada por la UE.



VI - OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

Se considera que la reforma propuesta en el artículo 9.1.c) relativo a la obligación de publicar todas las ayudas individuales que superen el importe de 100.000 euros es desproporcionada e implica una mayor carga administrativa para las Administraciones concedentes de ayuda.

VII - ERRORES DE TRADUCCIÓN

La última frase de la definición de organismo de investigación (artículo 2.83) indica: “las empresas que puedan ejercer una influencia decisiva en dichas entidades, por ejemplo, en calidad de accionistas o miembros, podrán no gozar de acceso preferente a los resultados que genere”, es decir, según está redactada esta frase en la versión española, el acceso preferente para las empresas a las que se refiere será una condición facultativa u opcional. Es más, el que estas empresas no posean un derecho de acceso preferente no será una circunstancia normal sino más bien extraordinaria.

Sin embargo, la versión francesa indica: “Les entreprises qui peuvent exercer une influence déterminante sur une telle entité, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou d'associé, ne peuvent pas bénéficier d'un accès privilégié aux résultats qu'elle produit” y la versión inglesa dice: “Undertakings that can exert a decisive influence upon such an entity, in the quality of, for example, shareholders or members, may not enjoy preferential access to the results generated by it”.

En ambos idiomas, el acceso preferente de las empresas de que se trata está simplemente prohibido.

Se ruega a la Comisión que subsane este error de traducción.

Madrid, a 14 de diciembre de 2021